

DESAFIOS DE SEGURIDAD DEL PERÚ YLARESPUESTA DEL GOBIERNO

OCTUBRE 2025

R. EVAN ELLIS





El autor es Profesor de Investigación sobre América Latina en el U.S. Army War College. Las opiniones expresadas aquí son exclusivamente personales. El autor agradece a RADM José Mejilla, BG Vitorio Bossio, José Robles, Juan Carlos Liendo, COL Óscar Picón Alcalde, COL Coco Ramos, COL Eduard Manolo, CAPT Nils Velasco y LTC Richard Villanueva, entre otros, por sus valiosas contribuciones a este trabajo.

INTRODUCCIÓN

Del 13 al 21 de septiembre de 2025, el autor viajó a Lima, Perú, para participar en un evento que reunió a profesores del *U.S. Army War College* y a sus exalumnos de Perú y de toda la región. Allí conversó con una amplia gama de expertos en seguridad peruanos sobre los desafíos del país y la respuesta de su gobierno y las fuerzas de seguridad nacionales. Este trabajo presenta las principales reflexiones derivadas de esas conversaciones.

Actualmente, el Perú enfrenta un preocupante conjunto de problemas que se refuerzan mutuamente y se profundizan, vinculados a la inseguridad, la criminalidad y la corrupción, los cuales amenazan la prosperidad, la estabilidad y la gobernanza democrática del país a largo plazo. El Perú está afectado por las interacciones destructivas entre economías ilícitas en expansión que involucran drogas, minería, tala ilegal y otras formas de contrabando, así como extorsión y secuestros.

Estas dinámicas implican una constelación fragmentada de clanes criminales familiares que responden a demandas externas y, en algunos casos, operan con el apoyo de grupos criminales internacionales provenientes de México, Brasil, Europa, China y otros países. Estas actividades explotan la debilidad institucional del Perú, sus altos niveles de corrupción e informalidad, y al hacerlo reproducen dicha disfuncionalidad. Esa informalidad y fragilidad institucional también hacen que combatir los flujos financieros de los grupos criminales resulte casi imposible.

LAS DIMENSIONES DEL CRIMEN ORGANIZADO Y LA VIOLENCIA CRIMINAL EN EL PERÚ

En el corazón del ciclo destructivo en el Perú está la sinergia entre la producción y exportación de <u>cocaína, la minería ilegal</u> —incluido su uso para lavar las ganancias de otras actividades criminales—, la tala ilegal, la extorsión, y actividades violentas como el secuestro.

Con el precio del oro <u>superando los 3.000 dólares por onza en 2025</u>, la minería ilegal se ha convertido en la fuente más significativa de ingresos ilícitos en el Perú. Aunque no toda la minería informal es ilegal según la legislación vigente, la enorme riqueza mineral del país ha creado oportunidades para actividades mineras ilegales en todo el territorio. Las vastas ganancias de la minería informal (incluidas las actividades ilegales) financian una gama de actividades legítimas e ilegítimas, entre ellas el uso de operaciones mineras legales para blanquear el oro y otros minerales producidos en explotaciones ilegales. Se cree que los ingresos de la minería informal <u>financian campañas congresales</u>, contribuyendo <u>probablemente a iniciativas</u> en el Congreso para <u>demorar la imposición de sanciones</u> a mineros informales que no se han inscrito para participar en la economía minera formal bajo la <u>ley de regularización minera</u> REINFO.



La minería ilegal también se utiliza como vehículo para <u>lavar las ganancias de</u> <u>la producción de cocaína</u> y del contrabando, así como de otras actividades ilícitas. Esto ocurre mediante compras locales de oro y otras transacciones realizadas con efectivo de origen ilícito.

Si bien la minería ilegal ocurre en todo el país, durante el último año la violencia asociada a tales actividades en las Tierras Altas andinas del noroeste, en Pataz, como el <u>asesinato de 13 mineros</u> en agosto de 2025, ha acaparado los titulares nacionales. El incidente fue uno de muchos registrados en los últimos meses, en los que mafias vinculadas a la minería ilegal emboscaron, secuestraron y asesinaron a numerosos trabajadores y a otras personas relacionadas con las minas, pese a la contratación de exmilitares y otros agentes de seguridad por parte de los operadores mineros. Un actor ilícito clave en la zona es el <u>clan Sánchez Paredes</u>, vinculado por algunos al destacado congresista peruano César Acuña.

Según los expertos entrevistados para este trabajo, la atención mediática reciente sobre la minería ilegal en Pataz ha desviado el foco respecto de niveles mucho mayores de minería ilegal que ocurren en otras zonas del país.

El área a lo largo del río Santiago, en la frontera con Ecuador, cerca de donde se libró la <u>Guerra del Cenepa</u> entre Ecuador y Perú en 1995, también se ha vuelto problemática, con operaciones ilegales de oro en las cercanías de San Ignacio que involucran tanto a poblaciones locales como a grupos criminales como Los Choneros del lado ecuatoriano.

En la región selvática del oriente peruano se da <u>otro tipo de minería ilegal</u>: allí, mineros informales utilizan mercurio y maquinaria de pequeña escala para extraer oro y otros minerales de los ríos de las tierras bajas.

La minería ilegal en el sureste del país —de Madre de Dios y Junín hasta Puno, cerca de Bolivia— sigue siendo un problema. Los focos principales incluyen La

Pampa, Sandia, Alto Molina y Rinconcito. Aunque el gobierno ha realizado operaciones de gran escala contra la minería ilegal en el sur, incluida la Operación Mercurio (2019), centrada en actividades ilícitas alrededor de áreas naturales protegidas en Madre de Dios, tales operativos solo desplazaron parte de la minería ilegal y otras actividades ilícitas más al sur.

El oro extraído en el sureste es comúnmente contrabandeado a Bolivia, donde se <u>blanquea a través de minas</u> locales, debido a que en Bolivia habría controles y auditorías menos efectivos de las operaciones mineras que en el Perú.

Superpuesta a la minería ilegal, el cultivo, la producción y el contrabando de cocaína continúan expandiéndose hacia nuevas áreas geográficas del país. En los últimos años se ha logrado eliminar la mayor parte de la producción de coca en el Valle del Alto Huallaga (UHV) y reducir en alguna medida la producción en los valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Este avance también ha incluido operaciones del gobierno peruano contra los remanentes del grupo terrorista Sendero Luminoso en la región. El grupo protegía cultivos de coca y, en ocasiones, participaba en su producción. Tras la reducción gradual de su alcance por operaciones de las fuerzas de seguridad a lo largo de los años, en agosto de 2022 el gobierno lanzó un ataque de gran escala contra su bastión en las montañas de Vizcatán, la Operación Patriota. Aunque su principal líder restante, Camarada José, escapó, el gobierno cambió a acciones más focalizadas y de menor escala contra los remanentes del grupo, incluidas varias operaciones en 2024.

Las acciones del gobierno peruano en el VRAEM y en otras zonas también incluyen <u>operativos persistentes</u> contra pistas de aterrizaje del narcotráfico, aunque se informa que personas locales vinculadas a los grupos de narcotráfico reparan rápidamente los daños.

A pesar de tales operaciones, en los últimos años el cultivo de coca en <u>otras</u> <u>partes del país se ha expandido</u>, particularmente en las tierras bajas selváticas mencionadas al norte del VRAEM y hacia el sureste. Aunque el clima en estas zonas de menor altitud hace que el contenido de alcaloides de la coca allí cultivada sea más bajo, puede producirse en mayores cantidades, ya que hasta hace poco estas áreas habían recibido menos atención de los esfuerzos antidrogas del Estado peruano.

En el norte, las nuevas áreas de preocupación incluyen aquellas a lo largo del tramo occidental del río Putumayo, en la frontera con Colombia, donde el 48.º frente ("Carolina Ramírez") de las FARC opera del otro lado.

En el noreste, la zona donde convergen las fronteras de Perú, Brasil y Colombia se ha convertido en un centro de contrabando y de apoyo a múltiples economías criminales de la región. Esto incluye el ingreso de armas a Perú desde Colombia —y en menor medida desde Brasil—, así como el traslado de precursores químicos para la producción de drogas, además de estupefacientes y oro. Debido a una sequía reciente que cambió el curso del río, en agosto de 2025 la zona también se convirtió en escenario de una disputa territorial, con embarcaciones militares peruanas y colombianas frente a frente, aunque sin disparos. Aunque el presidente de Colombia, Gustavo Petro, emitió acusaciones beligerantes contra el Perú por la situación, las relaciones de larga data entre los mandos militares de ambos países que administran la zona evitaron una escalada no deseada.

Volviendo a los desafíos de la economía ilícita vinculada a las drogas en Perú, en el noroeste del país, el área cercana a Jaén, en el departamento de Cajamarca, se ha convertido en una zona cada vez más importante de cultivo de amapola, utilizada para producir heroína. Expertos peruanos consultados para este trabajo consideran que gran parte de la heroína producida se saca de

contrabando por el puerto de Paita, cerca de Piura, con destino principal a Estados Unidos.

En Ucayali, como se mencionó anteriormente, la producción de coca también se ha convertido en un problema que <u>complementa la minería y tala ilegales en esa región</u>.

La producción de coca también ocurre más hacia el sureste, aunque en cantidades más limitadas. Gran parte de la producción se envía a Bolivia en forma de pasta básica en lugar de cocaína terminada. La gran mayoría de las aeronaves sospechosas de transportar drogas que incursionan en el espacio aéreo peruano provienen en realidad de Bolivia, con matrículas bolivianas. Un patrón común es que dichas aeronaves traen oro, armas y otros productos de contrabando desde Bolivia hacia Perú, para después regresar con drogas. Expertos peruanos entrevistados para este trabajo sostuvieron que, la inacción de las autoridades bolivianas ante las trazas de radar de aeronaves sospechosas que pasan del espacio aéreo peruano al boliviano, agrava el problema de controlar los vuelos del narcotráfico y disuadir futuras incursiones.

Puerto Maldonado, como encrucijada entre Perú, Brasil y Bolivia, se ha convertido en un importante eje de la economía ilícita generada por la cocaína, la minería, la tala y otras actividades de la región. Dado que la minería ilegal y otras actividades generan un flujo de dólares estadounidenses hacia el Perú, y puesto que los dólares escasean del lado boliviano de la frontera, el tramo de la Carretera Interamericana cercano a Puerto Maldonado cuenta con numerosas casas de cambio, en su mayoría informales, así como con otros negocios que prosperan al amparo de la economía ilícita local.



LA RED COMPLEJA DE LA INSEGURIDAD PERUANA:

ACTORES, ECONOMÍAS Y FLUJOS



HALLAZGOS CLAVE Y DATOS

1. FUENTES DE INGRESOS ILÍCITOS Y FORTALEZA

- La minería ilegal es la fuente más importante de ingresos ilícitos en el Perú, especialmente con el precio del oro superando los 3,000 dólares por onza en 2025.
- Existe una sinergia destructiva entre la producción y exportación de cocaína, la minería ilegal (incluido el lavado de dinero), la tala ilegal, la extorsión y los secuestros.
- La minería ilegal también se utiliza para lavar las ganancias provenientes de la producción de cocaína y de otras actividades ilícitas.

2. ACTORES CRIMINALES NACIONALES Y TRANSNACIONALES

- La economía criminal del país no está dominada por carteles internacionales, sino por un gran número de clanes familiares locales interconectados.
- Estos clanes blanquean sus ganancias mediante la construcción de propiedades, la compra de automóviles y bienes de lujo, tanto en zonas rurales como en ciudades cercanas (como Trujillo, Arequipa, Tacna y Moquegua).
- La criminalidad transnacional incluye la presencia de intermediarios de la mafia albanesa, el Cártel de Sinaloa (México), y grupos brasileños como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), además de Los Choneros (Ecuador).



3. IMPACTO URBANO (LIMA)

- La migración de población rural hacia zonas urbanas se ha intensificado con la inmigración venezolana.
- Las denuncias por extorsión en Lima aumentaron un 200 % entre 2020 y 2024 y un 50 % adicional en la primera mitad de 2025.
- La banda venezolana Tren de Aragua (TDA) fue un actor inicial clave en la expansión de la extorsión y la violencia, cuyas tácticas han sido copiadas por bandas locales.



En reflejo del alto precio de la cocaína en Europa y de su creciente importancia como mercado para la producción peruana —y para el resto de la región andina—, han aparecido en Perú intermediarios de la mafia albanesa y de otros grupos europeos. La representación y facilitación de estos grupos se complementa con la presencia del Cártel de Sinaloa (México), así como de los grupos brasileños Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV), e incluso de Los Choneros de Ecuador.

La estructura descentralizada de la economía criminal peruana implica que los negocios de minería ilegal, producción de drogas y otras actividades ilícitas en las zonas montañosas y selváticas del interior no están dominados por carteles internacionales, sino que permanecen en manos de un gran número de clanes familiares pequeños e interconectados que radican en Perú. Se cree que estos clanes blanquean su riqueza mediante la construcción de inmuebles y la compra de automóviles y bienes de lujo en esas zonas, así como invirtiendo en activos similares en centros urbanos cercanos como Trujillo (cerca de Pataz). De manera similar, en el sur del país, poblaciones de áreas rurales de Puno y de otros lugares blanquearían los ingresos de la minería ilegal y de actividades vinculadas a estupefacientes a través de bienes raíces y pequeños negocios en ciudades cercanas como Arequipa, Tacna y Moquegua.

El dinero ilícito y la migración de poblaciones desde las tierras altas andinas y las regiones selváticas también han alimentado la rápida expansión de desarrollos urbanos en la parte noreste de Lima (*"Cono Norte"*), como San Juan de Lurigancho y Comas, entre otros. La entrada de nuevo dinero y población en estas áreas ha impulsado tanto un boom inmobiliario como un <u>aumento significativo de los precios de la vivienda</u> en toda la región metropolitana de Lima.

De forma perversa, la entrada de dinero desde el campo hacia las ciudades también ha interactuado con la llegada de pandillas violentas a esas zonas a lomos de la ola migratoria venezolana, alimentando incrementos dramáticos en la extorsión, el secuestro y otros delitos urbanos. Las extorsiones en el área metropolitana de Lima aumentaron 200 % en 2024 y 50 % en el primer semestre de 2025. La extorsión ha golpeado especialmente a los barrios de clase media y populares, incluidos pequeños comercios, vendedores ambulantes e incluso mototaxis. Criminales han asesinado abiertamente a conductores de autobús y quemado unidades, lo que provocó paros de transportistas en demanda de mayor protección estatal. El uso de motocicletas para robar celulares y perpetrar asesinatos selectivos también se ha convertido en un problema.

Un impulsor inicial de esta extorsión y violencia fue la banda criminal venezolana Tren de Aragua (TDA), que siguió y explotó a más de 1,5 millones de venezolanos desesperados que emigraron al Perú, entre otros destinos de la región. Con el tiempo, el TDA se ha fragmentado en múltiples facciones en el país, cada una con altos niveles de violencia. Paralelamente, bandas no venezolanas han copiado las técnicas violentas de sus rivales venezolanos, que han demostrado ser efectivas para ganar territorio frente a grupos menos violentos, y ahora emplean su propia violencia para desplazar a bandas venezolanas de los territorios que reclaman.

Debido a los altos niveles de violencia urbana, al momento de la redacción de este informe, partes del norte de Lima seguían bajo <u>declaratoria de estado de emergencia</u>. En el sur y el este del país, por el contrario, la penetración de bandas venezolanas y la correspondiente evolución violenta de otros grupos ha sido más limitada. En Arequipa, por ejemplo, se reportan problemas significativos de extorsión, pero menos casos de secuestros y asesinatos violentos.

LA RESPUESTA DEL GOBIERNO PERUANO

Muchos peruanos perciben que el gobierno de Dina Boluarte ha hecho muy poco para combatir el creciente deterioro de la seguridad y el avance de la criminalidad, y que la <u>situación está empeorando</u>. De hecho, <u>la presidenta</u>, su gabinete y varios miembros del Congreso han sido objeto de numerosas denuncias e investigaciones por corrupción. En 2024, 67 congresistas del Perú estaban siendo investigados por 729 delitos distintos. La constante avalancha de acusaciones y procesos tanto contra el Ejecutivo como contra el Congreso ha contribuido a unos niveles de aprobación pública excepcionalmente bajos, de <u>3</u> % o menos en ambos casos.



Más allá de las percepciones, los expertos consultados para este trabajo identificaron una serie de problemas institucionales que impiden una respuesta eficaz del Estado. Entre ellos se incluyen dificultades en la producción y fusión de inteligencia. Los entrevistados lamentaron de manera casi unánime la falta de intercambio efectivo de información de inteligencia entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

A pesar de tales dificultades, los profesionales de las fuerzas de seguridad peruanas han trabajado para enfrentar los enormes desafíos del país en la medida de sus posibilidades.

La campaña peruana contra el crimen organizado y la inseguridad está liderada por instituciones civiles, entre ellas la Policía Nacional del Perú (PNP). La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) encabeza los programas de erradicación de cultivos de coca y de sustitución por cultivos alternativos, aunque con resultados mixtos. DEVIDA informó que la superficie dedicada al cultivo de coca, 90,000 hectáreas en 2024, fue aproximadamente igual a la del año anterior.

La Dirección Antidrogas (DIRANDRO) lidera las operaciones policiales contra laboratorios de droga, envíos y organizaciones de narcotráfico, incluyendo redadas recientes. La Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE) lidera los esfuerzos contra grupos terroristas como Sendero Luminoso, aunque en los últimos años el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas (CIOEC) ha encabezado operaciones contra líderes de alto perfil de Sendero, como el "camarada Artemio", así como contra cabecillas de otras organizaciones criminales.

En principio, el enfoque del gobierno peruano y las capacidades que busca mejorar o adquirir para responder a sus múltiples desafíos están definidos por

el Plan Nacional de Desarrollo 2030. De manera correspondiente, la planificación y adquisición de capacidades en cada rama de las Fuerzas Armadas está regida por un plan específico: el "Plan Quiñones" para el Ejército, el "Plan Grau" para la Marina, y el "Plan Bolognesi" para la Fuerza Aérea. Sin embargo, muchos de los entrevistados para este estudio sugieren que el proceso de adquisición de capacidades dentro del gobierno es menos sistemático de lo que los planes oficiales hacen parecer.

Además del <u>comando especial militar-policial en el VRAEM</u> —encargado de combatir el terrorismo, el narcotráfico y otras actividades ilícitas en esa región—, el gobierno peruano ha creado un <u>comando conjunto militar-policial</u> para <u>combatir la minería ilegal en Pataz (CUPAZ)</u>. Asimismo, el gobierno contempla la creación de un nuevo comando especial para enfrentar el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera con Ecuador y Colombia, aunque aún no se ha establecido.

El gobierno también fortalece sus capacidades penitenciarias, con mejoras en al menos cuatro cárceles y la construcción de un nuevo penal en <u>Abancay</u>, <u>departamento de Apurímac</u>. Su culminación, pese a algunos retrasos, se prevé para finales de 2026. El gobierno también ha discutido la posible construcción de cuatro prisiones adicionales, aunque estos proyectos no han pasado aún de la fase conceptual y de planificación.

En materia militar, el Ministerio de Defensa trabaja en el fortalecimiento de sus capacidades en los ámbitos aéreo, terrestre y marítimo, articuladas en los planes mencionados y con un énfasis en modernización tecnológica, movilidad territorial y cooperación internacional en defensa.

En el dominio terrestre, el Ejército del Perú ha establecido las <u>"Brigadas de Protección Amazónica"</u>, destinadas a combatir la minería ilegal, entre otros desafíos. Además, el Ejército peruano busca expandir su presencia territorial y

movilidad, enfocándose en diversas iniciativas, entre ellas la adquisición de <u>30</u> <u>vehículos blindados 8x8</u> y una cantidad adicional de vehículos todoterreno 4x4 provenientes de la <u>empresa surcoreana Hyundai</u>.

La iniciativa incluye planes graduales para producir los vehículos localmente, con compensaciones industriales (offsets) y un esquema para la fabricación progresiva de componentes más complejos y el mantenimiento a través de la empresa estatal de defensa FAME. El objetivo es transferir capacidades tecnológicas y desarrollar la industria de defensa nacional. Como parte de este plan, el Ejército peruano espera producir eventualmente en el país camiones militares Hyundai y ambulancias para uso propio.

En el ámbito naval, el <u>Perú trabaja con Hyundai</u> para fortalecer las capacidades de sus astilleros navales (SIMA) ubicados en Callao, Chimbote e Iquitos. Corea del Sur ha donado previamente a la Marina de Guerra del Perú dos grandes patrulleros, aunque antiguos. Se informa que Hyundai planea donar un submarino diésel-eléctrico a la Marina peruana durante la cumbre de líderes de APEC en octubre de 2025 en Seúl, donación que estaría vinculada a la decisión del Perú de adquirir los mencionados vehículos blindados de Hyundai.

La cooperación naval con Corea del Sur también incluye planes de coproducción de futuras fragatas, patrulleras costeras y otros buques.

Más allá de la cooperación con Corea del Sur, la Marina peruana ha construido embarcaciones fluviales especiales destinadas a llevar servicios estatales — como los del Banco de la Nación, registro civil y salud pública— a zonas remotas de la Amazonía y del sur del país. Estas embarcaciones, conocidas como Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PIAS), se han desplegado en ríos amazónicos, incluyendo el río Napo en el norte, hasta la localidad de Güeppí. Asimismo, las PIAS navales han sido desplegadas en el sureste, en el lago Titicaca.

El Ejército del Perú ha implementado su propia versión del concepto PIAS, utilizando vehículos para llevar servicios públicos a zonas accesibles por carretera en el noroeste del país y, en ocasiones, en el sureste.

En el dominio aéreo, la Fuerza Aérea del Perú (FAP) ha enfrentado graves dificultades para mantener la operatividad de su flota de helicópteros rusos Mi-8, Mi-17 y Mi-171, fundamentales para operaciones en zonas de gran altitud como Vizcatán. El problema radica principalmente en la negativa de Rusia a certificar el mantenimiento de motores y transmisiones que Perú realiza en su base de mantenimiento en Arequipa. La situación se ha visto agravada por problemas contractuales con subcontratistas, y por la falta de repuestos rusos, derivada de la guerra en Ucrania y de las sanciones internacionales que impiden trabajar directamente con empresas militares rusas.

La FAP ha priorizado la adquisición de cazas interceptores supersónicos, a través del Ministerio de Defensa, en un proyecto que ha recibido alta prioridad por parte del gobierno de Boluarte y cuenta con un presupuesto de 3.500 millones de dólares. Los tres contendientes son el F-16 Block 70 de Estados Unidos, el JAS-39 Gripen E/F de Suecia y el Rafale AF-4 de Francia.

El F-16, aunque el más caro por unidad, es altamente deseado por la FAP debido a sus características técnicas y a la relación estratégica de largo plazo con EE. UU. en materia de entrenamiento, mantenimiento y soporte. El Gripen resulta atractivo para algunos sectores, en parte porque lo están adquiriendo países vecinos como Brasil y Colombia, y porque cuenta con un lobby interno fuerte dentro de ciertos círculos de la Fuerza Aérea. Aunque el Rafale ha rendido bien en pruebas y se beneficia de la experiencia previa de la FAP con equipos franceses (los antiguos Mirage), existe preocupación por las pérdidas sufridas en combate durante un enfrentamiento importante entre India y Pakistán en mayo de 2025.

Más allá de la compra de interceptores supersónicos, la FAP busca adquirir hasta 12 aeronaves subsónicas para apoyar operaciones contra la minería ilegal y otras actividades. Entre los modelos de interés figuran el AT-6 Texan y el Super Tucano. Asimismo, pretende fortalecer su flota de aeronaves de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), como el Beechcraft King Air.

Pese a estos planes de adquisición, la notable falta de cobertura radar en el país y la escasa integración entre los radares de aviación civil, los radares militares de la FAP y los radares menores operados por la Marina en determinados puntos, podrían reducir la eficacia de los nuevos cazas para interceptar vuelos con drogas o contrabando. Actualmente, la FAP opera varios radares TPS-70 antiguos, que sufren fallas periódicas y brechas de cobertura debido a su escaso número y al relieve montañoso del país. El panorama aéreo militar recibe cierta información de los radares Thales del sistema de aviación civil, aunque los sistemas civil y militar no están integrados digitalmente.

En el ámbito del transporte, Perú opera aeronaves C-27 Spartan y planea invertir 54 millones de dólares para adquirir aviones <u>Boeing 737 NG</u> de mayor alcance para misiones logísticas.



RESPUESTA INSTITUCIONAL Y MILITAR DEL PERÚ:

PLANES Y DESAFÍOS



- La aprobación pública de la presidenta Dina Boluarte y del Congreso es extremadamente baja (3 % o menos).
- Un problema institucional clave es la falta de coordinación y fusión efectiva de inteligencia entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

2. Estructuras de respuesta civil y operativa

- La campaña contra el crimen organizado es dirigida por organismos civiles, principalmente la PNP.
- DEVIDA lidera la erradicación de cultivos de coca y los programas de sustitución de cultivos (en 2024, unas 90.000 hectáreas se destinaron a la coca, cifra similar al año anterior).
- Se han establecido comandos conjuntos, como el CUPAZ (Comando Unificado de Pataz), para combatir la minería ilegal.

3. Modernización militar por dominio:



Tierra (Ejército):

- Se han establecido las "Brigadas de Protección Amazónica".
- Busca adquirir 30 vehículos blindados 8x8 y vehículos 4x4 de la empresa surcoreana Hyundai.
- El plan incluye una producción local gradual a través de la empresa estatal FAME, con el objetivo de transferir capacidades y fortalecer la industria de defensa nacional.



Mar (Marina):

- Colabora con Hyundai para fortalecer los astilleros navales de SIMA en Callao, Chimbote e Iquitos.
- Existen planes de coproducción futura de fragatas y patrulleras costeras con Corea del Sur.
- Despliega Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PIAS), barcos fluviales que brindan servicios gubernamentales en zonas remotas.



Aire (Fuerza Aérea):

- Prioridad principal: adquisición de cazas interceptores supersónicos, con un presupuesto de 3,500 millones de dólares.
- •Los tres competidores son el F-16 Block 70 (EE. UU.), el JAS-39 Gripen E/F (Suecia) y el Rafale AF-4 (Francia).
- Busca adquirir hasta 12 aeronaves subsónicas adicionales, como el A-6
 Texan II o el Super Tucano, para operaciones contra la minería ilegal.
- Problema principal: la eficacia de los nuevos cazas se ve limitada por la escasa cobertura radar y la falta de integración digital entre los sistemas de aviación civil (Thales) y los militares (TPS-70).

Más allá de su contribución a las tareas de intercepción, vigilancia y transporte militar, la FAP mantiene una iniciativa PIAS aérea, basada en una flota de 14 aeronaves De Havilland Twin Otter, una de las más grandes del mundo. Algunos de estos Twin Otter están equipados con ruedas especiales para despegues y aterrizajes en pistas no preparadas, mientras que otros incorporan flotadores para acceder a zonas fluviales remotas demasiado lejanas o poco profundas para las PIAS navales.

Los sistemas aéreos no tripulados (UAS) representan otra área emergente para las Fuerzas Armadas peruanas. La empresa <u>Diseños Casanave</u> posee cierta capacidad de producción de drones, además de SEMANAC, enfocada principalmente en reparación de aeronaves. La institución militar evalúa actualmente la adquisición de varios drones, entre ellos el UBat VTOL (despegue y aterrizaje vertical), así como sistemas antidrones.

A pesar de estas iniciativas, el progreso y el alcance de los proyectos siguen siendo relativamente limitados. Los analistas consultados expresaron escepticismo sobre si las Fuerzas Armadas cuentan con un concepto integrado y coherente para la adquisición y uso operativo de drones y sistemas de defensa antidrones.

CONCLUSIÓN

El sentimiento de frustración y desilusión de muchos peruanos con el desempeño de su gobierno probablemente incidirá en los resultados de las próximas elecciones nacionales de mayo de 2026. El panorama político del Perú está altamente fragmentado, con 43 partidos que han registrado su intención de participar y con candidaturas que se formalizarán a mediados de octubre. Dado que, hasta la fecha, los partidos solo han forjado tres alianzas para presentar listas comunes, habrá un gran número de candidatos sobre los cuales el electorado sabe poco. Como en la elección anterior, existe el riesgo de que, al elegir entre dos postulantes poco conocidos, los votantes lo hagan con base en impresiones superficiales o simplemente votando en contra de alguien que desaprueban, lo que podría llevar a la selección de otro presidente inexperto o radical. Entre los candidatos con alguna trayectoria figura el radical izquierdista Guillermo Bermejo, a quien se le han atribuido vínculos con la organización terrorista Sendero Luminoso.

Hasta la fecha, pese a sus problemas, el Perú ha demostrado una estrecha cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y otros temas políticos, aunque también mantiene importantes vínculos comerciales con la RPC, incluyendo el puerto de Chancay, operaciones mineras y presencia china en telecomunicaciones, electricidad y comercio minorista. Perú también mantiene diversas relaciones comerciales y militares con Rusia.

Dada la centralidad estratégica del Perú como una de las principales puertas de entrada de Sudamérica hacia Asia, es de interés estratégico para Estados Unidos seguir involucrándose activamente con el país para ayudar a controlar la criminalidad y las fuerzas corrosivas que socavan la democracia y las instituciones, y que lo hacen vulnerable a liderazgos populistas y a socios externos depredadores. Un estribillo común que oyó el autor, al hablar del cortejo del Perú por parte de intereses malignos, fue: "¿por qué Estados Unidos no hace más?". Aunque el gobierno estadounidense quizá no esté dispuesto a competir para "superar las ofertas" de actores como la República Popular China (RPC) a fin de "ganarse" la lealtad del Perú, sí hay mucho más que Estados Unidos puede hacer para inocular al país frente a quienes, dentro y fuera de sus fronteras, pretenden llevarlo por uestructiva con implicaciones tanto para el país andino como para la región.









@ExpAbierto